



Certificación forestal en Centroamérica

EDGAR SEQUEIRA

La certificación forestal otorgada por el Forest Stewardship Council (FSC) ha crecido en los últimos 10 años mundialmente teniendo un claro impacto en el desarrollo de proyectos forestales: en 2005, en el mundo se certificaron casi 74 millones de hectáreas de bosques y plantaciones forestales, y en Centroamérica 687.000 ha. Pero a pesar de los 10 años de experiencia que tiene la región con este nuevo sistema de verificación del buen manejo forestal, hasta hoy no se ha realizado evaluaciones de su impacto ambiental, social y económico.

Fue en respuesta a las altas tasas con que se estaban deteriorando las extensiones de bosque natural y los hábitat que estos conforman, que en los inicios de los años noventa se estableció en el mundo la certificación forestal, que es un mecanismo de verificación (Bass *et al.* 2001) mediante el que un tercero brinda un seguro por escrito de que un producto, servicio o proceso está conforme con los estándares específicos -esto sobre la base de un control orientado por procedimientos acordados.

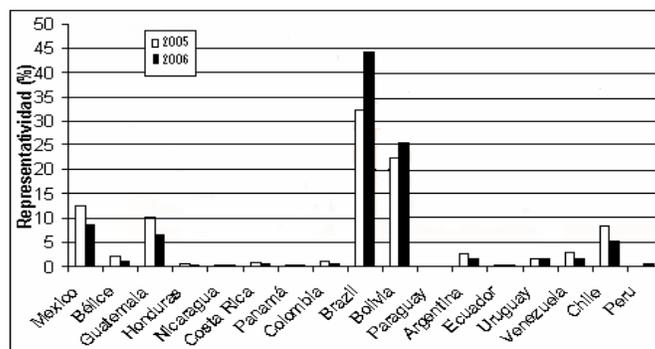
En 1992, en Río de Janeiro, una de las convenciones que se discutió fue la de bosques, pero el debate entre el Norte y el Sur sobre la autonomía de los países para decidir el uso de los bosques llevó a la convención correspondiente no se firmara, lográndose solo un *Acuerdo de principios forestales para el buen manejo*. De haberse logrado la firma de una convención internacional de bosques, posiblemente también hubiera surgido la certificación forestal; pero, al alcanzarse ella, se hizo más urgente poner en marcha un mecanismo de verificación independiente del manejo forestal.

A principios de la década de los noventa se formó una coalición de empresas, organizaciones no gubernamentales (*oenegés*) ambientalistas y sociales e individuos privados, con el propósito de elevar el nivel del manejo forestal (conjunto de técnicas silviculturales que se realizan en un bosque con el objetivo de incrementar la productividad de bienes y servicios) y lograr la apertura de las cadenas de abastecimiento maderero. Es así como se ideó el Consejo de Manejo Forestal (WWF 2000), *oenegé* sin fines de lucro e independiente.

EL FSC, fundado en Toronto en 1993, tiene como principal actividad la acreditación de las organizaciones que certifican la calidad del manejo forestal. Habiendo nacido en Europa la iniciativa de la certificación forestal, para conservar los bosques de ese continente y mejorar sus actividades de manejo forestal, pronto el modelo se copió y desarrolló en otras partes del orbe, entre ellas Latinoamérica.

De las 4.533.978 ha certificadas en Latinoamérica, aproximadamente el 33 por ciento son de plantaciones forestales (1.496.000 ha) y el 67 por ciento (3.037.098 ha) son bosques naturales. Entre Brasil y Bolivia se aglomera más del 54 por ciento del área total que se ha certificado en la región. Del total referente a plantaciones, Brasil posee un 49 por ciento (739.554 ha); Bolivia no posee área certificada en plantaciones, pero de sus 3.037.098 ha en bosque el 33,3 por ciento (1.012.948 ha) están certificadas. Bolivia reporta a finales del primer trimestre de 2006 un área certificada superior a los 2 millones de hectáreas, mientras que América Latina subió de 4.533.978 ha a mediados de 2005 a 7.995.392 ha a comienzos del presente año: 76 por ciento de incremento solo en Nicaragua el balance reportado por el FSC fue negativo.

Área certificada en Latinoamérica. Marzo 2006.



Fuente: sitio web de FSC.

En Centroamérica, la certificación está jugando un papel importante en la visión del manejo de los recursos forestales (véase WWF 2004); por ejemplo en Costa Rica, la mayoría de las nuevas inversiones se han hecho para el ecoturismo y la conservación del recurso forestal -suelo, bosque, agua). En Latinoamérica, a finales del 2005 se reportaban cerca de 4.533.978 ha certificadas, de las que el 12,8 por ciento (687.455 ha) pertenecen a Centroamérica (ver figura), principalmente a la parte norte de ésta, específicamente al Petén (el departamento de Petén, con una superficie aproximada de 35.854 km², ocupa la tercera parte de Guatemala), donde se ha dado tierras en concesión a los pobladores con el respaldo de WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) y se ha desarrollado planes de manejo y aprovechamiento de las existencias maderables y de algunos productos no maderables del bosque.

Área certificada en Centroamérica, 2005.

País	Total (ha)	%	Bosque (ha)	Plantaciones	Operaciones certificadas	
					MF	CdC
Belice	104.888	15,26	104.888	0	1	1
Guatemala	469.226	68,26	463.622	5.604	19	3
Honduras	37.277	5,42	37.277	0	15	6
Nicaragua	16.727	2,43	13.157	3.570	3	3
Costa Rica	49.346	7,18	8.975	40.371	4	3
Panamá	9.991	1,45	0	9.991	6	0
Total	687.455	100	627.919	59.536	48	16

Los proyectos forestales certificados en Centroamérica se han concentrado principalmente en Costa Rica y Guatemala. En Costa Rica, en 1994, se realizó la primera certificación de manejo forestal de la región en la empresa Portico. Y en 1995 se certificó la primera unidad de manejo (Morales 2004) en el Petén, Guatemala.

Los proyectos en Costa Rica (Alfaro 2005) no solo han recibido la certificación forestal sino que, además, la mayoría han certificado su cadena de custodia, o sea: garantizan que sus productos -tableros, sillas, mesas, etcétera- fueron elaborados con madera que se produjo en bosques certificados. La certificación de la cadena de custodia monitorea los productos certificados a lo largo de los canales de industrialización y distribución desde el punto de origen, o sea el bosque, hasta el producto final. Según Alfaro (Ibid.), el proceso del FSC se comenzó a implementar en Costa Rica en 1994, generándose un posterior auge del mismo a partir de 1999; entre este año y 2002 se certificó en el país el 74,7 por ciento del área total que está certificada hoy día, lo que corresponde al 73,3 por ciento de las unidades de manejo. Ya en 2002 Costa Rica reportaba un área total certificada de 72.288 ha distribuidas en 15 unidades de manejo forestal. Del área total certificada, el 12,1 por ciento corresponde a bosque natural, el 44,8 por ciento a plantaciones forestales y 43,1 por ciento a unidades de manejo forestal, habiéndose certificado tanto áreas con bosque natural como plantaciones forestales. En Costa Rica, de 2001 a 2002 el área certificada aumentó en un 10,8 por ciento, para un área de 7.840 ha de plantaciones forestales.

Centroamérica es tal vez el caso más importante de desarrollo forestal comunitario en el mundo, destacándose el buen manejo forestal impulsado por el FSC. El nivel organizativo alcanzado es de suma importancia, y ejemplo de ello lo son las concesiones comunitarias en la Reserva de la Biosfera Maya, en Petén, donde sobresalen dos sistemas de trabajo: las cooperativas forestales, caracterizadas por poseer un sistema privado de tenencia de tierras, y por ende ser dueñas del recurso forestal, y las concesiones forestales, organizadas en diferentes figuras como asociaciones, sociedades y cooperativas comunitarias, y caracterizadas por manejar los recursos forestales en tierras del estado.

Por cada concesión dada en Petén a cada comunidad, que como unidad productiva intentaba ingresar al sistema del FSC, a ésta se le pedía cumplir una serie de pasos y requisitos, tales como el cálculo de la capacidad de corta anual permisible, los planes operativos anuales, los planes de manejo forestal y hasta los principios y criterios impuestos por el FSC, además de tener que cumplir los prerrequisitos y requisitos dados por el evaluador. Realmente la certificación tomo auge en Petén a partir de 1995, cuando se certificaron las primeras tres unidades de manejo. Después de esto el proceso tuvo una gran acogida en Guatemala, principalmente por el hecho de que toda concesión comunitaria dentro de la Reserva de la Biosfera Maya deberá estar certificada antes de cumplir el tercer año de funcionar.

En Nicaragua también se ha certificado varios proyectos, específicamente en tres comunidades de la Región Autónoma Atlántica de Nicaragua, con concesiones comunales e iniciándose un nuevo modelo para el desarrollo de acciones de *manejo y comercio forestal responsable*. En Panamá ya se ha comenzado a desarrollar el *manejo y comercio forestal responsable* en la comarca de Emberá-Wounan, localizada en Darién. Mientras tanto, en Honduras se está impulsando

algunos proyectos en la región de Moskitía y la costa atlántica, bajo el auspicio de la Cooperativa Agroforestal Colón Atlántica de Honduras Limitada; además, allí trabaja la Federación de Indígenas y Nativos de la Zona de Mocorón y la Segovia.

En los últimos cinco años se ha dado una tendencia creciente hacia la certificación forestal en la región. En 1995 se reportaba apenas 50.000 ha certificadas (la mayoría plantaciones forestales de Costa Rica), y ya en junio de 2005 el FSC reportó para la región un total de 45 unidades certificadas y 20 certificados de *cadena de custodia*. El tipo de manejo de la certificación en Costa Rica ha sido diferente al de la región en general; este país ha sido pionero en el tema y a la fecha cuenta con 18 unidades certificadas.

La implementación de la certificación forestal en Centroamérica está evolucionando al mismo ritmo que en el resto del mundo. De hecho, iniciativas como la de manejo y comercio forestal responsable en Nicaragua, y otras como aquella ideada por el estado costarricense consistente en que se obliga a las instituciones gubernamentales y a las municipalidades a poseer un sistema de compra responsable respecto de productos forestales, han llevado a que muchos países examinen atentamente lo que sucede en la región y deseen copiar la metodología de trabajo.

La Red Mesoamericana y del Caribe de Comercio Forestal, también conocida como Jagwood+, impulsada por WWF, es una red independiente de productores de madera, fabricantes, intermediarios y distribuidores comprometidos con hacer del manejo forestal responsable una realidad práctica a través de compras, procesamiento y comercio de productos certificados. El objetivo de Jagwood+ es vincular a los productores y procesadores de madera certificada de Centroamérica y el Caribe con los compradores locales, regionales e internacionales comprometidos en el comercio de productos forestales certificados. En Costa Rica, por medio de Jagwood+ se ha hecho alianzas ideológicas con arquitectos con la finalidad de que éstos utilicen madera certificada en sus proyectos; se ha incentivado el procedimiento de *políticas responsables de compra*; se ha juntado clientes y compradores (seminarios de Metafore) y, además, por medio de una alianza con la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Costa Rica, se ha implementado cursos de certificación forestal que han permitido la incursión de los futuros profesionales forestales en el tema.

Según Héctor Martínez (2006), el área certificada en América bajo el proceso del FSC en 2006 es de 32.072.974 ha; con más de 8.500 productos mundiales diferentes con base en materia prima certificada; 4.588 certificados de *cadena de custodia* en 73 países, y 817 certificados en *unidades de manejo forestal* en 72 países.

Los pasos que se dan para que una comunidad o empresa obtenga la certificación forestal son los siguientes: (1) solicitar formalmente la certificación a una empresa u organización autorizada para evaluar los bosques y otorgar el sello verde del FSC; (2) el ente certificador envía a un experto a hacer una preevaluación para identificar si algo no se cumple y se necesita mejorar antes de realizar una evaluación completa (una parte importante de esta fase es una breve revisión de los principales documentos de manejo de la comunidad a fin de identificar áreas que pueden necesitar trabajo adicional para que puedan cumplir con los *principios y criterios* del FSC; (3) después de la visita al bosque el experto elabora un informe con recomendaciones de las cosas que la comunidad tiene que mejorar; (4) cuando cualquier brecha o vacío identificado durante la preevaluación haya sido corregido se puede llevar a cabo la evaluación principal, para lo que es necesario notificar de los cambios a la certificadora; (5) la empresa certificadora envía un forestal, un ecólogo y un sociólogo para hacer una evaluación completa, es decir un examen detallado de las prácticas actuales del manejo forestal para asegurarse que todos los requisitos del programa de certificación han sido tomados en cuenta de forma adecuada; (6) se hacen visitas de inspección del terreno, entrevistas con los encargados de las operaciones, con empleados, miembros de comunidades vecinas, grupos ambientalistas y funcionarios forestales, además la comunidad deberá proporcionar a los especialistas toda la documentación; (7) al final de la evaluación los resultados son formalmente presentados y discutidos con los solicitantes; (8) este informe lo estudian otras personas expertas que no son empleados de la empresa u *oenegé* certificadora pero que sí cuentan con grandes experiencia y conocimiento del tipo de bosque en cuestión, experiencia técnica general y reconocimiento internacional y nacional -el objetivo principal del proceso de revisión es el de confirmar la credibilidad técnica del informe de evaluación y el de examinar las conclusiones alcanzadas por el equipo auditor-; (9) si los expertos avalan el informe el bosque puede ser certificado y la madera llevará el sello del FSC, y (10) después de la certificación la certificadora mantendrá visitas anuales para asegurarse de que la comunidad o empresa continúa cumpliendo con los requisitos del programa de certificación; una visita de seguimiento tratará cualquier área problemática que haya sido identificada durante las visitas anteriores y también se enfocará en los cambios en las prácticas de manejo o en el panorama requerido por la certificación -que la comunidad tiene que mejorar.

Como toda actividad de manejo forestal, alcanzar la certificación forestal implica gastos antes y después del proceso: preevaluación, auditorías, membresía... Los costos de la certificación forestal se agrupan en tres categorías: *Costos directos del certificado*, que son propiamente el desembolso que tiene que hacer la comunidad o empresa por la evaluación para optar por la certificación: debe de pagarse una evaluación previa para determinar si es conveniente

seguir con el proceso de certificación, luego pagar la auditoría completa del certificado y después cancelar anualmente las visitas del equipo certificador para poder mantener la categoría de estar certificado. *Costos del mejoramiento del manejo forestal*, que es cumplimiento de las condiciones y recomendaciones casi siempre de índole silvícola. *Costos indirectos*, que se refiere al costo de oportunidad. Los costos del proceso para bosques y plantaciones son diferentes: para el bosque natural (caso de la Reserva de la Biosfera Maya) tenemos un costo mínimo de \$0,12/ha para un proyecto cuya extensión es de 83.558 hectáreas, y un costo máximo de \$2,06/ha para una unidad de manejo de 6.484 ha. El costo mínimo para las unidades de plantaciones certificadas (caso de Costa Rica) es de \$1,39/ha para un proyecto cuya extensión es de 3.329 ha, y el costo máximo es de \$36,36/ha para una unidad de manejo de 385 ha. Lo anterior muestra que el costo tiende a ser inversamente proporcional al área del proyecto, pero se debe tener en cuenta que el costo de la certificación depende de las precondiciones y condiciones impuestas por el evaluador al proyecto.



Sábalo, Nicaragua

Olivier Chassot

A pesar de que hay dudas acerca de si la certificación de unidades forestales deja beneficios económicos, sí se puede asegurar que ella fortalece el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad -lo que asegura una producción constante-, también el desarrollo de estudios de impacto ambiental y planes de manejo y la implementación de prácticas silvícolas que asegurarán una mayor permanencia del recurso -que en el futuro se cuantificará en divisas. Además asegura el desarrollo de iniciativas como la de *políticas de compra responsable*, que tienden a favorecer el uso de productos forestales certificados en obras del estado y municipalidades y que pueden generar beneficios a los productores certificados. También Nicaragua aplica *políticas responsables de compra* y en Estados Unidos se desarrolla una alternativa para productos forestales certificados llamada *edificios verdes*. En lo económico se genera una ventaja competitiva porque se facilita el acceso a nuevos mercados, también se mejora la imagen pública de la compañía y el espíritu de equipo de sus empleados. En lo ambiental se ayuda a la conservación de la diversidad biológica, del recurso agua, del suelo, de paisajes y de ecosistemas únicos y frágiles. Además, se mantienen las funciones ecológicas y la integridad de los bosques y se protegen las especies amenazadas o en peligro de extinción y sus hábitat. En el área social algunos de los beneficios pueden ser: se impulsa el respeto a los derechos de los trabajadores, los indígenas y las comunidades locales, y se contribuye a la disminución de accidentes de trabajo tras el cumplimiento de las normas de seguridad y prevención.

Respecto de las oportunidades para que la certificación forestal sea factible, se ha señalado (Bass *et al.* 2001) que esto dependerá de la conjugación de cuatro factores: (1) capacidad de ajuste a los criterios impuestos por el certificador por parte del evaluado, o sea la capacidad de poder reconvertir las recomendaciones en puntos a explotar; (2) la extensión del área a certificar y el tipo de productor -una mayor área significa un mayor valor de oportunidad-; (3) la posibilidad

de demostrar que las unidades de manejo forestal certificadas son mejores que otras no certificadas, lo que es comparativo respecto de la metodología de *línea base* pedida a los proyectos de *mecanismo de desarrollo limpio* en el negocio de emisiones de fijación de Carbono -o sea, lo que se tiene que hacer es demostrar qué pasaría si no se certificara esa unidad de manejo forestal (evaluando calidad, precio, etcétera), y (4) cambio de mentalidad en los patrones de consumo hacia la compra de productos que sean de producción sostenible y, sobre todo, sostenida.

Después de haber tenido el FSC una alta capacidad de instalación en Latinoamérica, el proceso de certificación de productos ha llegado a un punto en el que debe avanzarse al siguiente nivel en la cadena de abastecimiento. Ya no podemos quedarnos únicamente produciendo la materia prima, sino que también debemos poseer la capacidad de elaborar productos de un elevado valor agregado, y ello se consigue propulsando propietarios con potencial gerencial. Debemos guiar a los propietarios indígenas y privados a ese otro nivel donde la versatilidad del producto y su calidad le generan el precio *premium* ofrecido al comienzo del proceso de certificación. Esto conllevará la continuación de las cadenas de custodia hasta el comprador final, debiendo comenzar la etapa donde se certifique a los muebleros, los ebanistas, los arquitectos, los intermediarios, los depósitos, las tiendas y, sobre todo, debemos educar a los futuros clientes a demandar materia forestal certificada.

Aunque muchos son los riesgos a los que se someten los propietarios de unidades a certificar, se debe de entender que los precios *premium* no son un riesgo sino un mecanismo de comercialización que usan algunas empresas para promover el sistema y que provocan falsas expectativas. A pesar de ello, un propietario puede ser envuelto en una atmósfera a veces engañosa de sobrepuestos (precios *premium*) que son ofrecidos por el mercado y que al final del proceso no se dan. Algunos que han obtenido estos precios *premium* no los reciben en respuesta a estar certificados sino a la calidad del producto ofrecido. Algunas empresas como B&Q, en el Reino Unido, y Home Depot, en Norteamérica (ambas grandes tiendas para el hogar), ofrecen precios *premium* a los productos certificados que les ofertan, pero no están dispuestos a pagar por productos certificados de mala calidad, por lo que se debe de recordar que el certificado no es un respaldo de buena calidad del producto dado.

Si se logra superar la barrera de la calidad y se generan productos aceptables en el mercado internacional, las pequeñas empresas deberán superar la barrera de no poseer canales de comercialización consolidados (algo muy común en Centroamérica), sobre todo si se entiende que la apertura de canales comerciales y estudios de mercado son procesos costosos que no se obtienen mediante la certificación forestal.

Uno de los principales riesgos a los que se someten los administradores y propietarios de las unidades de manejo forestal que se certifican es poder mantener y mejorar la operación en forma continua; o sea, aplicar el principio de mejoramiento continuo de la calidad de los procesos. Eso tiene no solo un costo sino que requiere el compromiso de todo el personal para mantener y mejorar los estándares. En algunos momentos, a la hora de evaluar las entidades certificadoras podrán imponer mayores requisitos a algunas unidades de manejo que a otras; el hecho de que existan diferentes entidades certificadoras y que éstas puedan enfatizar en diferentes criterios al evaluar una misma unidad, podría provocar el recelo del/los propietario/s a certificar. Más aun, cada entidad contrata para las evaluaciones a equipos profesionales integrados por diferentes personas y eso puede influir en la diferencia de valoración personal de cada uno de los criterios y estándares.

Como se pudo observar, las razones de certificarse son muchas, pero sería mejor tener ubicado en el mercado nacional o internacional un nicho en el cual colocaremos el material certificado, ya sea como madera en rollo o como productos elaborados (esto será lo más deseable, sobre todo si se toma en cuenta que por algunos muebles de un buen fabricante de marca registrada se puede estar pagando hasta \$16.000). El crecimiento del área certificada a nivel mundial al igual que en Latinoamérica y Centroamérica, permitirá el abastecimiento de la demanda de material certificado que está creciendo día a día, perdiendo la entrada de divisas en la cartera forestal de cada nación de la región. Realmente el proceso de certificar unidades de manejo forestal ha permitido elevar la calidad de vida de los empleados de las empresas forestales del mundo y ha generado metodologías de manejo donde el ambiente es el mayor beneficiado. Es por esto que a cualquier unidad forestal con deseos de ser competitiva se le recomienda buscar el certificado por buen manejo forestal.

Referencias bibliográficas

- Bass, S. *et al.* "Certifications impacts on forest, stakeholders and supply chains", en Bass, S. *et al.* 2001. *Instruments for sustainable private sector forestry series*. International Institute for Environment and Development. London.
- WWF. 2000. *Certificación: un Futuro para los Bosques del Mundo*. Reino Unido.
- WWF. 2004. *Costos y Beneficios de la Certificación Forestal y mecanismos para la resolución de obstáculos comunes*. Serie técnica n° 5. WWF Centroamérica.
- Morales, J. 2004. *Revisión de la corta anual permisible Cooperativa Unión Maya Itzá, Petén, Guatemala*. Serie técnica n° 1, WWF Centroamérica.
- Alfaro, M. 2005. *Certificación de manejo forestal sostenible en Costa Rica*. Costa Rica.
- Martínez, H. 2006. *Determinación de la modernización de la producción de bienes y servicios forestales: Los retos de Costa Rica en el contexto mundial*. Universidad Nacional. Costa Rica.

